



claridadpuertorico.com

¿Quién lo rechaza? El pueblo llano y miles de trabajadores de la empresa antes estatal ahora privatizada. La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) sostenía al cierre de esta edición que, pese al hecho consumado, proseguirán las protestas, las que dejaron de ser coto cerrado para extenderse a disímiles sectores sociales con el fin de repudiar de paso al anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP) en su entrega de un valor nacional al consorcio foráneo por un plazo de 15 años.

Además, esta transacción recuerda aquello del mundo al revés porque el odiado contrato le costará al Gobierno 894 millones de dólares y todavía ninguna autoridad ha dicho de dónde saldrá ese monto. Se presume que del erario público. Por si fuera poco, se anunciaron ya aumentos de la tarifa eléctrica. Y no es todo: LUMA también fomenta el uso de gas natural, frustrando el objetivo boricua de lograr energía ciento por ciento renovable para 2050 al permitir que los extranjeros presenten cambios con los reguladores al plan de recursos integrados de Puerto Rico.

Empero, aquí no concluyen las tristezas en curso desde este 1º de junio, pues al privatizar AEE se pierde un activo económico valioso (si tenía problemas organizacionales y de solvencia ahora no es relevante en este texto) y también se asesta un contundente golpe a la lucha de los trabajadores porque la UTIER era un sindicato muy activo y combativo. Varios medios locales indican que la maniobra responde asimismo al propósito político de tratar de eliminar opositores antineoliberales, pues de manera premeditada en el contrato con LUMA no se incluyó una cláusula de protección laboral. Es un hecho que cerca de 5 000 trabajadores de la AEE han sido desplazados. El actual gobernador ha olvidado que el pueblo echó a Ricardo Roselló de Fortaleza. ●

Caso de “robo” ilustra rampante corrupción

La Autoridad de Energía Eléctrica boricua (AEE) estaba en la mira de las transnacionales desde que en Wall Street se pactó un acuerdo de restructuración de deuda demasiado generoso con los acreedores, a expensas del pueblo puertorriqueño

Por **MARÍA VICTORIA VALDÉS RODDA**

PUERTO Rico nunca la ha tenido fácil en su propósito de salvar y consolidar la identidad patria. Y a pesar de que hay resistencia, hoy en día el gobernador de turno pretende que el pueblo se “deje meter el pie” al amparo de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa), promulgada en junio de 2016 por Barack Obama.

Así, en su prepotencia colonial, el Congreso yanqui creó una agencia externa con control directo y significativo sobre la máxima figura en la Isla, lo cual limita la autonomía en asuntos económicos y sociales: la aborrecida Junta de Control Fiscal para supervisar las finanzas del Estado Libre

Asociado. El boricua no es tonto ni dócil, y a pesar de la permanente sonrisa del actual “regente”, Pedro Pierlusi, sabe darse cuenta cuando se trata de un *bluff*.

En las batallas diarias, mencionando las cosas como son, alza su voz el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), seguido por una generación nueva, horrorizada por las perspectivas sombrías que depara el capitalismo neoliberal. Y ahora no es menos ese batallar, con movilizaciones en contra de la venta de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a LUMA Energy (Quanta Services, Canadian Utilities e Innovative Emergency Management).

¿Quién está de plácemes? La ya mentada Junta de Control.